

Santiago, diecinueve de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, por sentencia de tres de febrero de dos mil veinticinco, en la causa RIT 124-2024, RUC 2.300.739.737-2, condenó a Samuel Esteban Antipil Castro a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales, en calidad de autor del delito consumado de disparos injustificados en la vía pública, sorprendido en la comuna de Cañete el 1º de julio de 2023. Asimismo, se le condenó a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales, como autor del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego, sorprendido en el mismo lugar y fecha.

Adicionalmente, se le condenó a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo y al pago de una multa de cinco unidades tributarias mensuales, más la accesorias legal, como autor del delito consumado de tráfico de drogas en pequeñas cantidades, perpetrado en la comuna de Cañete el 4 de agosto de 2023. Además, se le impuso la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, más las accesorias legales, en calidad de autor del delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, perpetrado en la misma fecha y lugar; y, finalmente, la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, más la accesorias legal, como autor del delito consumado de tenencia ilegal de municiones, sorprendido en la misma fecha y lugar.

En contra de dicho fallo, la defensa del sentenciado recurrió de nulidad, arbitrio que se conoció en la audiencia pública de veintinueve de abril pasado, oportunidad en la cual la Defensoría Penal Pública incorporó la prueba ofrecida en su arbitrio y aceptada previamente por este Tribunal, convocándose a los intervinientes a la comunicación de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:



Primero: Que, el recurso de nulidad se cimenta, de manera primordial, en la causal de nulidad prevista en el artículo 373, letra a) del código adjetivo, protesta que se asila en el hecho de haberse permitido la sustitución de un perito por otro durante la audiencia de juicio oral, sin reunirse los requisitos exigidos por el legislador procesal para hacer procedente tal reemplazo.

A través del vicio invocado se denuncia una vulneración a la garantía del debido proceso, legalmente tramitado, consagrada en el artículo 19, N°3, inciso 5° de la Constitución Política de la República explicando que, al haberse permitido el reemplazo del perito que concurrió a estrado, se transgredió lo dispuesto en el artículo 329, inciso final del compendio adjetivo, autorización dada por el tribunal sin cumplir los requisitos exigidos por la norma referida, por cuanto el Ministerio Público no presentó una licencia médica que acreditase la incapacidad sobreviniente del perito Jorge Rizzo, habiendo tenido tiempo suficiente para ello, ya que en la audiencia de factibilidad ya había anunciado tal situación.

En concepto de la defensa, de no haber declarado el perito, no habría sido posible condenar al acusado, puesto que no existía otro medio de prueba que diera cuenta en juicio la dinámica de los disparos, el medio que se habría empleado para efectuarlos y el tipo de arma usada, razón por la cual solicita invalidar el juicio oral y la sentencia, de forma parcial, únicamente respecto del primer hecho de la acusación fiscal.

Como primer capítulo subsidiario de invalidación, la defensa propone el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra c) del Código Procesal Penal. Lo anterior fundado en que a la defensa se le privó de la posibilidad de exhibir a un testigo la declaración que formuló previamente, para los efectos de refrescar memoria. Expone que la negativa del tribunal para efectuar tal ejercicio, en su concepto, vulnera norma expresa, toda vez que el propio artículo 334 autoriza dar lectura “a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía” en la forma señalada por el artículo 332 del código precitado.



Afirma que, a través de la resolución que impidió la práctica de dicho ejercicio se coartó el derecho a defensa, toda vez que resultaba imposible contrastar los dichos de la testigo con aquellos de la fecha de los hechos, razón por la cual pide invalidar el juicio oral y la sentencia, de forma parcial, respecto del primer hecho de la acusación fiscal.

Finalmente, en subsidio de lo anterior, el recurso postula el motivo absoluto de nulidad previsto en el artículo 374, letra e) del código adjetivo, toda vez que en concepto de la defensa, el tribunal del fondo vulneró el principio lógico de la “razón suficiente” al fundamentar la decisión de condena con relación a los hechos que dio por probados, en virtud de la prueba producida en juicio oral, no siendo posible la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que arribó en la sentencia, en los términos ordenados por el artículo 297 del mismo cuerpo legal.

Explica que el único medio de prueba para establecer, específicamente, el delito de porte de arma de fuego fue, en definitiva, una presunción, lo que impide, desde un punto de vista de lógica formal arribar a la decisión de condena. Así el único medio de prueba para establecer los hechos que se tuvieron por probados y, particularmente, la acreditación el porte de arma de fuego fue, en definitiva, una conclusión derivada de atribuirle la autoría del delito de disparos injustificados al acusado, lo que implica que el “antecedente” no se encuentra en vinculación necesaria con el “consecuente”, y, por lo mismo, el discurso valorativo contenido en dicho fallo infracciona el principio lógico ya referido.

De acuerdo con lo expuesto, en concepto de la defensa, no existe prueba alguna que se haya rendido en juicio que corrobore que el acusado portó un arma de fuego, ya sea del tipo prohibida o convencional, sino únicamente lo que se corrobora es que sería autor del delito de disparos injustificados. En este sentido, conforme lo antes expuesto, al no existir prueba alguna que acredite que el acusado portó un arma de fuego, y siendo aquello uno de los elementos descriptivos del tipo penal imputado, no pudo dictarse una sentencia condenatoria



por aquel ilícito, por lo que solicita invalidar el juicio oral y la sentencia, de forma parcial, respecto del primer hecho de la acusación fiscal.

Segundo: Que, en lo concerniente a los hechos que fundaron la acusación del Ministerio Público, en su motivo séptimo y únicamente respecto del hecho N°1 de la acusación —materia del recurso— la sentencia impugnada tuvo por acreditado que, *“...el 1 de julio de 2023, alrededor de las 6:00 am, en la vía pública, calle Diego Portales altura del N°664, Cañete, Samuel Esteban Antipil Castro, portó sin la autorización de la autoridad competente, un arma de fuego del tipo escopeta, la cual percutió de manera injustificada, desde la vía pública, en contra del station wagon Hyundai Tucson, placa patente BSKB.82, conducido por Angélica Huenchuñir Erices, resultando este vehículo con múltiples impactos de perdigones balísticos en su parabrisas trasero como en la carrocería...”*.

Estos hechos fueron calificados por el tribunal como constitutivos del delito de disparos injustificados y porte ilegal de arma de fuego.

En torno a lo afirmado en el recurso de nulidad, el fundamento noveno del fallo impugnado estableció que, *“...sobre estos mismos hechos el Ministerio Público rindió además prueba pericial, consistente en informe evacuado por el perito armero Jorge Riffo Vargas, la que fue rendida en juicio mediante el perito de reemplazo Leonardo Rebolledo Contreras, el que indicó que como perito balístico le corresponde exponer el informe N°49 de 19 de julio de 2023 del Laboratorio de Criminalística Cobertura Zona Sur, Concepción, confeccionado por el mencionado perito Jorge Riffo Vargas quien actualmente se encuentra con licencia médica. Indicó que en dicho informe se da cuenta de una inspección ocular por el delito de disparos injustificados, para lo cual el perito se trasladó hasta la calle Paicaví frente al N°165 de la comuna de Cañete, lugar que se ubica frente al cuartel PDI, donde se encontraba ubicado en la vía pública un vehículo blanco marca Hyundai, modelo Tucson, placa patente BSKB 82, el cual a la inspección fue posible constatar que en el lado posterior, costado izquierdo del portalón, presentaba diversos impactos de proyectiles balísticos múltiples, perdigones, los cuales se*



encontraban en un área de 45 X 45 cm, ubicado a 9 cm de la línea media posterior y a 83 cm aproximadamente desde el suelo. Posteriormente el equipo pericial, como consta en el informe, se trasladó hasta el principio de ejecución señalado por la víctima, la señora Angélica María Huenchuñir, lugar que se encontraba ubicado en la intersección de la Avenida Diego Portales y calle Las Araucarias, comuna de Cañete, lugar en el que luego de una inspección ocular no se encontraron evidencias de interés balístico y se consigna en el informe una fotografía de dicha intersección. Respecto de las consideraciones balísticas en el informe se señala que en este tipo de impactos balísticos múltiples, perdigones, realizados principalmente por armas de fuego del tipo escopeta, el comportamiento no depende ni del calibre ni del número de perdigón sino que, independientemente de ello, al proceso de disparo esto se comporta a medida que va avanzando en su trayectoria, se configura una dispersión que va aumentando a medida que avanza en su vuelo. De acuerdo al trabajo señalado por el perito Jorge Riffo, el disparo habría sido efectuado en la cara posterior del vehículo, en el portalón con una trayectoria de vuelo de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha según el sentido de marcha del vehículo, a una distancia estimada, siempre y cuando se haya realizado con un arma de fuego convencional, de aproximadamente 10 metros de distancia.

Examinado por el Ministerio Público le fue exhibido el set fotográfico señalado en el número 2 de los otros medios de prueba, consistente en dos fotografías, indicando el perito que en la primera se visualiza la cara posterior del vehículo Hyundai Tucson blanco, con la patente señalada y, en el costado izquierdo es posible observar los impactos balísticos de proyectil múltiple en un área de 45 X 45 cm. La segunda fotografía corresponde al principio de ejecución señalado por la víctima, es decir la intersección de la Avenida Diego Portales con calle Las Araucarias de la comuna de Cañete. Le fue exhibida nuevamente la primera imagen y, respecto del arma idónea para causar tal impacto señaló que el perito Jorge Riffo señaló una distancia de disparo de acuerdo a pruebas que se



realizan con armas de fuego convencionales, es decir, armas de fuego de tipo escopeta, con un cañón que generalmente presentan 60 cm de largo aproximadamente, y de acuerdo a eso señala una distancia de disparo estimativa. Como salvedad hace alusión a que este tipo de proyectiles múltiples, es decir los perdigones, son parte constitutiva de los cartuchos, principalmente son cartuchos de caza y en este caso pueden ser utilizados de manera convencional en armas de fuego del tipo escopeta, pistolete y de manera también complementaria pueden ser utilizados en armas de fuego de fabricación artesanal y en este caso, en ausencia de un arma de fuego, no es posible y no está consignado en el informe de manera clara que puede haber sido realizado con un arma de fuego convencional o con un arma artesanal, toda vez que el comportamiento de los proyectiles balísticos múltiples en la trayectoria de vuelo no configura diferencia entre un arma de fuego y la otra, el comportamiento del cartucho en el proceso de disparo es el mismo en un arma de fuego convencional como asimismo en un arma de fuego de fabricación artesanal, la única diferencia que es posible visualizar en un proceso de disparo es que a una misma distancia la dispersión en un arma de fuego convencional será mayor que la dispersión en un arma de fuego artesanal, toda vez que el cañón y el diseño balístico que tiene un arma y otra son distintos y a menor cañón y a una mayor holgura en el cañón en un arma artesanal la dispersión se produce de manera anticipada, versus la dispersión que se produce en un arma de fuego convencional con un cañón convencional por diseño.

Interrogado por la defensa si estas últimas consideraciones que realiza están contenidas en el informe, señaló que las consideraciones balísticas que están consignadas en el informe y que da cuenta de un proceso de disparo con proyectiles balísticos múltiples con un arma de fuego del tipo escopeta y que da cuenta de una trayectoria de vuelo del impacto y de una distancia de fuego estimativa que son los 10 metros; reiterada la pregunta, concretamente si las conclusiones que mencionó en orden a si este impacto pudo ser causado por un



arma de fuego convencional o artesanal están en el informe, señaló que la pregunta que le formularon era en relación a su experticie como perito balístico, el informe no hace tal distingo.

Preguntado si en la pericia se obtuvo evidencia material a examinar indicó que de acuerdo a lo señalado en el informe en el principio de ejecución se fijó solamente el lugar, no levantándose evidencia, existiendo solamente como elemento balístico los impactos en el vehículo registrado en el informe; consultado si es por esto que para llegar a las conclusiones del informe se utiliza un arma de fuego de tipo convencional puesta a disposición por el laboratorio, señaló que en este caso el trabajo que hace el perito balístico es un trabajo casuístico y de acuerdo a la experiencia que tiene que tener el señor Riffo es la misma experiencia que tiene él como perito balístico en que realizando pruebas con armas de fuego convencional la generalidad es que en este caso se haya arribado a una distancia estimativa de diez metros, agregando que las pruebas, en el caso de tener el arma de fuego, se realizan pruebas con el arma en particular y es posible determinar, a modo de ejemplo, que pudo ser un disparo entre ocho y nueve metros, entre los siete y los ocho, pero es solamente en el caso de tener un arma de fuego con la que se busca replicar de manera experimental un posible proceso de disparo, en este caso, en ausencia de un arma de fuego y teniendo la presencia de proyectiles balísticos múltiples, lo que se da es una distancia estimada que en este caso, con un arma de fuego convencional, sería aproximadamente de diez metros, en el caso que se hubiese utilizado un arma de fuego de fabricación artesanal, esa distancia sería menor, por las condiciones señaladas precedentemente que cambian las condiciones balísticas de un arma de diseño artesanal versus un arma fabricada bajo patrones balísticos establecidos y conocidos”.

Por su parte, el fundamento decimocuarto del fallo en revisión estableció que, “...los testigos presenciales del hecho Angélica Huenchuñir y Sergio Catalán, tal como ya se ha referido, fueron precisos y claros en estrados en su sindicación



al encartado, señalando la primera que cuando iba con Sergio transitando por el lugar ya establecido, conduciendo su vehículo, se percataron que en una esquina estaba Samuel Antipil acompañado de dos mujeres, que Samuel llevaba algo en la mano, que siguieron avanzando cuando sintió el impacto, miro por el retrovisor y los vio arrancando y en esa calle no había nadie más, que al ver por el retrovisor vio que él tenía como un fierro largo en la mano, que era un fierro como de 30 o 40 cm, de color negro. Sus dichos resultaron concordantes con los referidos por Catalán, el que dio cuenta que iba de copiloto, que había tres personas a las que divisaron cuando iban pasando, estaba Samuel Antipil con dos mujeres a las que no conoce, que avanzaron un poco más y ahí fue cuando sintieron el impacto del escopetazo en la parte de atrás, en la luneta del jeep. Agregó que cuando vio a Samuel este portaba dos fierros en las manos, lo vio hacia el lado del piloto, tenía en las manos dos fierros largos, prácticamente negros, cree que era una hechiza, las que conoce y, consultado si pudo ver quién realizó ese impacto indicó que sí, que por el espejo retrovisor vio cuando juntó los dos fierros y los percutió, luego salieron corriendo y que no logró ver si las otras personas tenían algo en sus manos.

Esta sindicación que los mencionados testigos efectuaron en estrados fue la misma que realizaron el día de los hechos ante la Policía de Investigaciones, como aparece de las declaraciones de los funcionarios Valenzuela y De La Jara. Como se ha dicho, refirió el primero que la denuncia inmediata fue contra Samuel Antipil, lo que no resulta extraño desde que tanto Angélica Huenchuñir como Sergio Catalán sostuvieron que les era persona conocida y dieron suficiente razón de tal afirmación, como ya ha quedado consignado. Agregó Valenzuela que al llegar sus colegas de turno procedieron a tomarles declaración, las que él presenció y que allí la víctima indicó que vio a tres personas, reconoció al hombre como Samuel Antipil quién estaba acompañado de dos mujeres, a quienes también conocía, por cuanto eran amigas de una ex compañera; que al seguir la marcha sintió un impacto de perdigones en la parte posterior del vehículo, salió



rápidamente del lugar viendo por el espejo retrovisor del auto que estas personas salían. Agregó Valenzuela que Catalán señaló igualmente ante De La Jara que iban por calle Diego Portales y casi al terminar la calle se percató de estas personas, reconoció también a Samuel, el que estaba con dos mujeres, una de ellas era una antigua vecina que él tenía, una vendedora de pasta base de nombre Juanita y otra mujer joven de la cual no sabe su nombre pero la describe como una persona joven que tenía un tatuaje en una ceja, de tez clara y contextura gruesa; que cuando pasaron al lado de estas personas, vio en las manos de Samuel unos fierros, los que reconoce como una escopeta hechiza, también manifestó que Samuel lo vio fijamente y una vez que siguen el trayecto sintieron el disparo en la parte posterior del vehículo, se asustaron y salieron rápidamente del lugar. El funcionario Cristian De La Jara señaló a su turno, en igual sentido, que Huenchuñir refirió sobre el punto que en el lugar observó a tres personas que estaban en la esquina, un varón al que reconoció como Samuel Antipil, conocido de ella, estaba segura de eso porque este joven había sido pololo de una amiga de ella, conocido del lugar, antiguo vecino, el que estaba con dos mujeres a las que ella no reconoció en ese momento pero que había visto anteriormente y reconocía como amiga de una de sus amigas y que al pasar al lado de estos sujetos sintieron un impacto de escopeta en la parte posterior del vehículo.

Lo mismo respecto de Catalán el que al funcionario policial le señaló que llegaron al lugar y se percató de la presencia en la esquina de Samuel, a quien también conoce, que nunca ha tenido problemas con él, sin embargo antiguos amigos suyos, un grupo donde él pertenecía, tuvo problemas con el imputado; que probablemente el balazo era para él por ese motivo, al reconocerlo, porque dice que al pasar, el sujeto lo miró fijamente y él pudo observar que tenía en sus manos un artefacto, unos fierros dijo él, que reconoce como una escopeta hechiza; que el sujeto estaba acompañado de dos mujeres en ese lugar, una de ellas la Juani, mujer de unos 30 años, conocida en el lugar y la otra una niña que



no sabía cómo se llamaba pero que describió como robusta, tez blanca y que tenía un corte o tatuaje en una de sus cejas; pasaron, se miraron fijamente y posteriormente sintieron el impacto del escopetazo.

Cabe señalar además que los funcionarios policiales dieron cuenta de haberse efectuado también un reconocimiento en kárdex fotográfico en el que ambos testigos reconocieron inmediatamente al acusado, lo cual no resulta extraño por cuanto, como se ha indicado, ambos testigos dieron fundada cuenta de cómo y por qué lo conocían con anterioridad, lo que ya se ha consignado en fundamentos previos. Igualmente cabe reiterar que el testigo Catalán reconoció positivamente al acusado en la sala de audiencias, ejercicio que no fue requerido a Angélica Huenchuñir.

De esta manera los testigos presenciales dan cuenta clara de haber observado al encartado con unos fierros en las manos cuando iban pasando, haber sentido el impacto y luego haberlo visto huir portando los mencionados elementos.

Tal como se ha razonado, estando acreditada la existencia del impacto balístico de perdigones en la parte trasera del móvil, es evidente que estos debieron ser percutidos empleándose un elemento idóneo para aquello. En tal contexto, los testigos vieron al encartado portar unos fierros antes del impacto y también con posterioridad al mismo, de manera que, entendiéndose que estos hechos se desarrollaron en el breve espacio de tiempo que pudieron haber tardado los testigos presenciales en pasar en automóvil frente al encartado y sus acompañantes, no puede sino colegirse que fue el encartado quien los portó en el tiempo intermedio, es decir, en el momento de ejecutarse el disparo. Se observa entonces como carente de sentido práctico el cuestionamiento que pretende formular la defensa a los testigos Huenchuñir y Catalán en orden a no haber declarado previamente a hacerlo en estrados que vieron al acusado percutir el arma porque atendida la dinámica clara y contestemente por ellos descrita ello no parece necesario, puesto que los elementos que aportan resultan suficientes para



llegar a esa y no a otra conclusión. Debe además dejarse establecido que la testigo Huenchuñir no señaló en estrados haber visto al acusado percutir el arma, por lo que la supuesta contradicción con declaración anterior no era tal y, en cuanto a haber declarado ante la policía que vio al encartado con un arma, lo que ella señaló sí haber hecho, Valenzuela dijo al contraexamen no recordar si ella señaló haber visto algún fierro en manos de Samuel y De La Jara indicó al contraexamen que nada dijo sobre haber visto a Samuel con tales elementos, lo que deriva en una contradicción no aclarada entre los dichos de Huenchuñir y De La Jara, cuestión que tampoco elimina el hecho asentado de haber sido aquello efectivamente declarado por Catalán y de resultar concordante con la dinámica ya explicada. Ha de señalarse igualmente aquí que no es exigible a los testigos dar cuenta con mayores detalles de los que pudieron aportar, atendida la dinámica de los hechos, de cuál era la naturaleza de estos fierros, sin perjuicio de lo cual igualmente el testigo Catalán los reconoce como un arma hechiza, lo que efectivamente pareciera ser la realidad de las cosas, puesto que tal instrumento permitiría la percusión del disparo, el que no hay dudas que ocurrió puesto que sus efectos quedaron plasmados en el vehículo de la víctima y asimismo tal dinámica resulta absolutamente compatible con la que concluye la pericia balística en cuanto a dirección y distancia aproximada del disparo”.

Tercero: Que, en relación con el capítulo principal de invalidación, la infracción de garantías fundamentales denunciada, como se reseñó, se sustenta en la incorporación de la prueba pericial a través de la declaración prestada en audiencia de juicio por otro perito armero, autorizada por el tribunal de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 329 del Código Procesal Penal, precepto que permite incorporar la prueba pericial mediante la exposición que realice otro perito de la misma especialidad y que forme parte de la misma institución: *“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer”.*



En la especie, no fue discutido entre los intervinientes que el Ministerio Público, ya en la audiencia de factibilidad, adelantó la imposibilidad de comparecencia del perito armero Jorge Rizzo Vargas debido a una condición médica, y que en su remplazo depondría otro perito, petición que fue autorizada por el tribunal, sin que posteriormente el recurrente cuestionara tal hecho.

Cuarto: Que, para resolver los cuestionamientos planteados en el recurso respecto de las actuaciones procesales antes precisadas, útil resulta analizar las disposiciones pertinentes contenidas en el Código Procesal Penal, sobre la prueba de peritos.

El inciso primero del artículo 314 e inciso primero del artículo 315 del citado cuerpo legal, previenen que el Ministerio Público y los demás intervinientes pueden requerir la elaboración de informes periciales desde el inicio del procedimiento penal, los que deberán ser presentados por escrito ante el juez de garantía y solicitar que los peritos sean citados a declarar al juicio oral, acompañando los comprobantes que acrediten la idoneidad del experto, correspondiendo a dicha judicatura pronunciarse en la audiencia de preparación de juicio oral sobre su admisibilidad como medio de prueba. Este control judicial sobre la admisibilidad de la prueba pericial tiene por objeto, entre otros, evitar que declaren en juicio oral personas que no son, en realidad, expertos o que no acrediten suficientemente su especialidad o profesionalismo, conforme lo dispone el artículo 316 del Código adjetivo.

El conjunto de normas antes mencionadas, conforma el contexto general en que debe ser solicitada y admitida la prueba pericial, en tanto que la declaración de peritos en juicio oral, según lo establece el artículo 319 del mismo cuerpo legal, se rige por las normas previstas en el artículo 329 y, supletoriamente, por las establecidas para los testigos, aplicándose lo dispuesto en el artículo 299 inciso segundo —sancionando con las penas previstas para el delito de desacato— al perito que se negare a prestar declaración en juicio sin justa causa.



En particular, el inciso primero del artículo 329 del Código procedimental establece: *“Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente...”*, en tanto que en el inciso séptimo, autoriza a los testigos y peritos que, *“por algún motivo grave y difícil de superar no pudieren comparecer a declarar a la audiencia de juicio, podrán hacerlo a través de videoconferencia o a través de cualquier otro medio tecnológico apto para su interrogatorio y contrainterrogatorio...”*, petición que deberá ser justificada por el solicitante en una audiencia previa que será especialmente citada al efecto, debiendo los testigos y peritos comparecer ante el tribunal con competencia en materia penal más cercano al lugar donde se encuentren.

Quinto: Que, dentro de ese panorama normativo es que debe ser interpretada la regla prevista en el inciso final del artículo 329 del Código Procesal Penal, desprendiéndose rápidamente de ello su carácter doblemente excepcional, no solo por su tenor literal, en cuanto señala: *“Excepcionalmente, en el caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del perito para comparecer”*, de manera que el propio legislador ha equiparado el fallecimiento del perito o testigo, a casos insuperables de “incapacidad sobreviniente”, al emplear la conjunción disyuntiva “o”; sino porque de todos los preceptos colacionados, es posible colegir que existen otras reglas, como la prevista en el artículo 319 del Código en comento, que autorizan a la judicatura a imponer la pena prevista para el delito de desacato, al perito que se negare a prestar declaración en juicio sin justa causa; o aquella prevista en el inciso penúltimo del artículo 329 antes aludido, al que la parte interesada puede ocurrir ante “algún motivo grave y difícil de superar”, que determine que el perito no pudiese comparecer a declarar a la audiencia de juicio, caso en el cual el legislador ha previsto como remedio proporcional a la afectación de derechos que indudablemente tal ausencia conlleva al enjuiciado, que el deponente preste su declaración de manera telemática, previo cumplimiento de las salvaguardas que el mismo precepto contempla.



Esta interpretación se condice, además, con lo previsto en el artículo 5°, inciso segundo, del Código Procesal Penal, en cuanto dispone interpretar de manera restrictiva y proscribire interpretar por analogía, las disposiciones del mismo Código que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades, como lo es el precepto que permite que otro perito declare en juicio oral, distinto a aquél que elaboró el informe pericial y emitió su dictamen técnico, respecto del cual el Juez de Garantía examinó su admisibilidad —artículo 329 inciso final—, pues de no aceptarse el cambio, en cierto sentido limitaría la garantía judicial mínima de todo inculcado en un proceso criminal, de conceder a su defensa el tiempo mínimo para su preparación, obtener que el perito informante comparezca a la audiencia de juicio y sea examinado por aquélla para dar razón de los hechos constatados en el examen de la prueba material objeto de su estudio y exponga sus conclusiones, siempre en ejercicio del principio contradictorio, garantías fundamentales establecidas en el artículo 8 N°2 literales c) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los artículos 5° inciso segundo y 19, N°3 de la Constitución Política de la República, como se señaló.

En fin, de lo que estamos en presencia, ante la norma del inciso final del artículo 329 del Código Procesal Penal, es de una ponderación legislativa *a priori* y abstracta en favor del derecho de defensa y la inmediatez en la percepción de la declaración de un perito, la cual sólo puede ser derrotada, a juicio de la ley, bajo la hipótesis de fallecimiento del perito o su incapacidad para comparecer al juicio oral, cuestiones que son las que le cabe verificar su ocurrencia o no al tribunal de la instancia, en la comprensión interpretativa restrictiva ya señalada, y sin superponer su propio juicio ponderativo singular, al de la autoridad legislativa.

Sexto: Que, la exégesis normativa antes efectuada, lleva necesariamente a concluir que la judicatura del fondo no infringió las garantías fundamentales del debido proceso legal y el derecho de defensa del acusado, al admitir como válido que un profesional distinto al que efectuó la pericia balística, expusiera el



contenido y conclusiones del informe elaborado por el perito armero Jorge Riffo Vargas, pues esa determinación se ajustó a los estrictos márgenes de la prerrogativa establecida en el inciso final del artículo 329 del Código Procesal Penal, aplicándola a un caso previsto en ella, desde que el perito Riffo Vargas sería intervenido quirúrgicamente y, en consecuencia, los jueces estimaron que se encontraban ante una incapacidad sobreviniente, que le impedía comparecer y prestar declaración en el juicio oral, razón por la cual la causal de invalidación en estudio no podrá prosperar.

Séptimo: Que, en lo referido a la primera causal subsidiaria hecha valer, resulta útil tener en consideración que la exposición de motivos que se ha efectuado, ha requerido, previamente, la demostración de sus presupuestos, como es la efectiva afectación de los derechos de la defensa al impedir el tribunal el ejercicio de los que la ley le confiere, toda vez que no basta la mera afirmación referida a que se le negó el ejercicio de refrescar memoria, siendo necesaria no sólo su demostración, sino también dejar meridianamente claro el tenor del debate, el objeto o tópico sobre el cual recayó y los motivos del tribunal para desestimar lo pretendido.

Octavo: Que, analizando el ejercicio pretendido por la defensa, en la forma en que se pidió durante el juicio oral, el mismo no se ajustó a lo que señala el artículo 332 del código adjetivo. En primer lugar, dicha norma señala de manera expresa que la lectura para apoyo de memoria permite la incorporación de declaraciones del testigo prestadas ante el fiscal, el abogado asistente del fiscal, en su caso, o el juez de garantía, en tanto que, lo pretendido por la defensa era que el tribunal hiciera una lectura completa, o que el testigo lo hiciera respecto de una declaración brindada ante la Policía de Investigaciones, en circunstancias que el artículo 334 se refiere sólo a la incorporación de registros y no al ejercicio invocado; y, en segundo lugar, dado lo transcrito en el recurso y lo incorporado durante su vista, no aparece que la testigo no recordase los hechos y, por tanto, el ejercicio que se pretendía, supuestamente, era el poder superar una contradicción



eventual en su testimonio y no dar lectura al referido registro para el apoyo o “refresco” de su memoria, como se plantea en el arbitrio recursivo.

Noveno: Que, huelga recordar, además, que el motivo absoluto de nulidad en estudio guarda relación con el hecho de que se impida a la defensa el ejercicio de las facultades que la ley otorga, mas no a la posibilidad de un ejercicio absoluto y por sobre la reglamentación legal que rige, en el caso de marras, el examen de los testigos. Lo cierto es que la defensa pudo interrogar a los testigos conforme quedó asentado en la sentencia, de forma tal que el vicio denunciado no es tal.

A mayor abundamiento, aun en el evento que pudiese considerarse que la negativa del tribunal de admitir el ejercicio propuesto impidiese a la defensa el ejercicio de sus prerrogativas legales —situación ya descartada— la protesta de la recurrente carece de trascendencia y sustancialidad en los términos propuestos pues, el testimonio de la testigo Angélica Huenchuñir fue tan sólo uno de los elementos de convicción que ponderó el tribunal, mas no el único, ya que la misma convicción de condena pudo alcanzarse con el testimonio de los demás testigos, uno de los cuales incluso presencié los hechos, identificando plenamente al acusado como quien efectuó el disparo que alcanzó la luneta del vehículo que conducía, de forma tal que la causal en revisión será desestimada.

Décimo: Que, con relación al segundo y último capítulo de invalidación subsidiaria, importa señalar que la ley exige respecto del examen de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales, que los tribunales asienten ciertos hechos y expresen los medios que sustentan esas determinaciones fácticas, ya que la motivación de la sentencia legitima la función jurisdiccional y permite conocerla no sólo al acusado sino a todos los intervinientes en el proceso criminal. Este proceso, entonces, supone exponer razones, formular interpretaciones y explicitar su posición sobre las tesis que sustentan las partes en el juicio, plasmando en la decisión el convencimiento alcanzado y el razonamiento que respalda la convicción adquirida (entre otras, SCS N°12.885-2015 de 13 de octubre de 2015).



Es preciso también tener en consideración que este Tribunal ya ha señalado en sucesivos fallos que toda sentencia condenatoria debe ser, por imposición del artículo 340 del Código Procesal Penal, el fruto de la convicción del tribunal sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral que conduzca a los jueces a la certeza, más allá de toda duda razonable, que en los hechos ilícitos ha correspondido a los acusados una participación culpable y penada por la ley. *“En este orden de ideas, es la prueba legalmente obtenida, explicada racionalmente y sometida a la pertinente contradicción, la que permitirá destruir la inocencia que durante todo el litigio acompañó a los enjuiciados”* (entre otras, SCS N°s 21.408-2014 de 8 de septiembre de 2014; y, 1.323-2015 de 24 de marzo de 2015).

Así, la salvaguardia esencial del derecho a una sentencia fundada y motivada encuentra consagración en el artículo 342, letra c) del Código Procesal Penal, que impone a los sentenciadores la obligación de exponer de manera clara, lógica y completa, cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del mismo ordenamiento. Tal disposición establece un sistema de libertad en la valoración de la prueba, el que sólo reconoce como límites los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. De esta manera, el proceso de clausura de un procedimiento legalmente tramitado lo constituye una sentencia que se ciñe a los parámetros citados (entre otras, SCS N°s 21.408-2014 de 8 de septiembre de 2014; y, 1.323-2015 de 24 de marzo de 2015).

Undécimo: Que, se desprende de la simple enunciación de los preceptos que se vienen comentando, que nuestra legislación procesal penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces un trabajo de elaboración cuidadoso en la concepción de sus fallos. La preocupación esencial de toda sentencia penal de fijar los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas,



favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del cuerpo de leyes ya citado. Al efecto, el fin de la fundamentación que exige la norma que sustenta el recurso por la causal que se analiza, no es otro que permitir la reproducción y fijación del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llega la sentencia, carga que se ve reforzada por lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 36 del Código procesal aludido, aplicable en la especie por ser común a todo tipo de resoluciones dictadas en el juicio oral, que declara que la simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los medios de prueba o solicitudes de los intervinientes no sustituirá en caso alguno aquella debida fundamentación, debiendo entonces dar cuenta de lo escuchado en audiencia y, con base en ello, razonar conforme a las normas de la dialéctica a fin de evidenciar las motivaciones que se han tenido en cuenta para preferir un medio respecto del otro o para darle preeminencia, de modo que de dicho análisis fluya la constancia de cómo hicieron uso de la libertad para apreciar la prueba y llegaron a dar por acreditados los acontecimientos y circunstancias que serán inamovibles posteriormente (entre otras, SCS 3.873-2011, de 18 de julio de 2011; 21.408-2014, de 8 de septiembre de 2014; y, 1.323-2015, de 24 de marzo de 2015).

Estas exigencias están provistas del correspondiente respaldo constitucional, ya que el inciso 6° del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República declara que: *“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”*, por lo que las señaladas normas reglamentan la forma cómo los jueces deben dar por acreditados los hechos y, si no son respetadas, permite la anulación correspondiente.

Duodécimo: Que, sin embargo, no puede desatenderse que la exigencia legal de análisis de toda la prueba y explicitación de las motivaciones que sostienen la decisión judicial no es un requerimiento meramente formal, sino que encuentra su fundamento en razones de carácter sustantivo, como es la cautela



de la coherencia del razonamiento que se explicita en el fallo, como garantía consagrada en favor de las partes que se someten a la decisión judicial, asistidas por el derecho a realizar su reproducción para alcanzar las conclusiones a que llegó la sentencia, conjurando así la arbitrariedad en la decisión de absolución o condena que se emita. Por ello, la carga que grava a los jueces en orden a analizar toda la prueba tiene ese sentido: velar porque la decisión jurisdiccional obedezca a una operación racional, motivada en elementos de prueba legítimos que justifiquen racionalmente sus afirmaciones.

Decimotercero: Que, de una lectura exhaustiva del fallo en revisión, aparece que el tribunal, de la ponderación completa de la prueba de cargo, logró una total reconstrucción de los hechos investigados, para lo cual se valió de la libre valoración de los diversos elementos de cargo, bajo los límites o parámetros que impone el artículo 297 del compendio adjetivo. Debido a lo anterior, es que la motivación duodécima del fallo en estudio concluye —de manera irredargüible— que un disparo debe ejecutarse con un instrumento idóneo para percutir un cartucho, sumado al hecho asentado que los impactos provinieron de perdigones, lleva necesariamente a concluir dos posibilidades: o se empleó un arma del tipo escopeta o un arma artesanal, ambas armas de fuego, como desarrolla el fundamento decimosexto, para luego optar por el tipo penal que resulta menos gravoso para el acusado, según se concluye en la motivación decimoséptima.

Decimocuarto: Que, entonces, la causal en estudio, conforme se advierte de una aproximación literal a sus formulaciones, cuestiona la valoración dada por los sentenciadores a los medios de prueba, sin indicar de qué manera dicho aquilatamiento infringe la reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados, correspondiendo a una diversa valoración de aquellos y de las conclusiones que de ellos se extraen, demostrando una insatisfacción con el asentamiento de los hechos expuestos en el fallo y, en definitiva, con lo decidido, sin que ello dé sustento a una infracción que configure



la hipótesis de nulidad que en este acápite se pretende, razón por la cual será rechazado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letras a), 374 letras c) y e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso deducido por la defensa de Samuel Esteban Antipil Castro en contra de la sentencia de tres de febrero de dos mil veinticinco, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, y en contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 2.300.739.737-2, RIT 124-2024, los que, por consiguiente, **no son nulos**.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos concurre al rechazo del recurso por la causal del artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, pero teniendo presente las siguientes consideraciones:

1º) Que en concepto del previniente, y respecto de los delitos de porte o tenencia de arma de fuego y municiones, y de disparos injustificados con la misma arma, no concurre un concurso material de dos delitos, sino que debió aplicarse la regla del concurso medial prevista en el artículo 75 del Código Penal; no obstante a ello la norma contenida en el artículo 17 B de la Ley de Control de Armas, puesto que dicha disposición debe ser interpretada en su real sentido y conforme a sus fines, esto es, que al señalar que *“...los delitos sancionados en esta ley se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasidelitos que se cometan empleando las armas...”*, evidentemente alude a que los delitos sancionados en leyes distintas deben ser penados conforme a éstas, y que si además se han empleado armas, deben estas últimas conductas ser castigadas con arreglo a la ley precitada; sin perjuicio de considerar que el delito de disparos injustificados necesariamente requiere, para su comisión, que el hechor porte o detente armas de fuego y municiones, por lo que se produce la subsunción de los menos graves en el que tenga asignada mayor penalidad;

2º) Conforme a lo anterior, se concluye que el tribunal del fondo, al condenar al acusado, además del delito de disparos injustificados, por el delito de



porte ilegal de armas de fuego y municiones, aplicó erróneamente el artículo 17 E de la citada Ley y los artículos 74 y 75 del Código Penal, al establecer la existencia de un concurso real de ilícitos, e imponer dos penas diversas a la conducta desplegada por el encartado;

3º) Que, sin embargo, el error de derecho antes expresado no fue invocado como causal de nulidad ante este tribunal *ad quem* por el impugnante, por lo que no es posible estimarlo concurrente de oficio, atendida la naturaleza de la causal, que requiere siempre su invocación por el agraviado, conforme a la regla del inciso segundo del artículo 379 del estatuto procesal del ramo.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y, de la prevención, por su autor.

Nº5.051-2025.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sres. Manuel Valderrama R., Leopoldo Llanos S., Sra. María Teresa Letelier R., y los Abogados Integrantes Sres. Juan Carlos Ferrada B. y Eduardo Gandulfo R. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con permiso. Santiago, 19 de mayo de 2025.



En Santiago, a diecinueve de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

